

Primer parcial Historia Argentina

1. El sistema político argentino de finales del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX se caracterizó por ser un período de constante cambio. En los siguientes párrafos voy a desarrollar las principales características de dicha fase, dividiéndola en dos partes: una que va desde el año 1880 a 1916 y otra de 1930 a 1943. Aunque a simple vista parezca que estas dos etapas de la historia argentina no tienen casi nada en común, ambas simbolizan relevantes procesos en la historia política de Argentina; y están fuertemente influidas por la presencia de un constante fraude en manos de la oligarquía, que recurre a este recurso para conservar su poder político.

En 1880, luego del triunfo de las tropas nacionales frente a la última de las milicias provinciales, la de la provincia de Buenos Aires, se inaugura una nueva etapa de la historia argentina: la consolidación del Estado argentino. En palabras de Gallo, este suceso marca un punto de inflexión en la historia de nuestro país, y simbolizó un paso decisivo en el fortalecimiento de las autoridades nacionales. Desde el momento en el que se designa como Presidente al General Roca por medio de un pacto entre gobernadores, empiezan a ponerse en marcha una serie de medidas que inician este proceso de consolidación y se da comienzo al predominio político del Partido Autonomista Nacional (PAN).

Hacia fines de 1880 empiezan a sancionarse medidas que poco a poco fueron centralizando el poder político en manos del gobierno nacional: la federalización de la ciudad de Buenos Aires, la supresión de las milicias provinciales y la ley de unificación monetaria. Según Gallo, estas ideas eran consistentes con la ideología reinante en algunos países de Europa, sobre todo aquellos que estaban encaminándose en procesos de unificación nacional (como Italia y Alemania). Otros de los componentes claves según este autor fue la incorporación de las tierras ocupadas en la Conquista del Desierto, que quedaron bajo la tutela del gobierno general; y la ley de impuestos internos (sancionada en 1891), que centralizó la recaudación fiscal.

Además de promover estas medidas con el objetivo de trasladar ciertos poderes a la esfera de la administración nacional, este período también se caracterizó por una serie de medidas que fueron pensadas con el objetivo de impartir una ideología patriótica a los ciudadanos argentinos. La más importante de ellas, en mi opinión, fue la ley 1.420 (de educación común), sancionada en 1884, que estipuló que la enseñanza primaria debía ser impartida de forma gratuita, obligatoria y laica, aseguraba la transmisión de las ideas nacionalistas y el comienzo de la conformación de un sentido común nacional. La otra de estas medidas fue la

promulgación de la ley Ricchieri, sancionada durante la segunda presidencia de Roca, que reglamentó el servicio militar obligatorio; completándose así la organización del Ejército Nacional que había iniciado la supresión de las milicias provinciales y, según De Privitellio, tenía la tarea de “convertir a los conscriptos a la vez en ciudadanos pacíficos y en argentinos patriotas”¹.

A nivel político-partidario, el final del siglo XIX en la Argentina se caracterizó por la monopolización del poder político en manos de un solo partido: el Partido Autonomista Nacional. Este partido estaba conformado en su totalidad por miembros que representaban los intereses de la clase dominante argentina, en la que predominaban las ideas conservadoras y se defendía un régimen oligárquico. En palabras de Rapoport, esta élite que gobernaba el país tenía “una conducta en el poder antidemocrática, basada en la marginación de gran parte de la ciudadanía, la corrupción y el fraude electoral”².

La falta de alternancia en el ejercicio del poder es, según Gallo, un rasgo distintivo del sistema político argentino; y este período histórico en particular es un muy buen ejemplo de esto. El exclusivismo, el bloqueo a la oposición y la constante aparición del fraude llevaron a que ciertos sectores se agrupen para tratar de ponerle un fin al dominio del PAN. En este contexto, en el año 1890, se produjo una rebelión que duró tres días y culminó con el desplazamiento del presidente Juárez Celman. Este acontecimiento, que luego se conocería con el nombre de la Revolución del Parque, fue encabezada por la Unión Cívica, presidida por Alem. Este dirigente planteó que la ilegitimidad del gobierno del turno justificaba dicha insurrección, y que dicha ilegitimidad estaba asociada a la falta de elecciones universales.

A partir de este momento, según Persello, comienza un período de formación de nuevos partidos políticos y también de redefinición de las condiciones de funcionamiento de los ya existentes, surgiendo así una importante fracción de la Unión Cívica, fundada en 1891: la Unión Cívica Radical. Este partido fue tomando cada vez más fuerza y ganando más adeptos, sobre todo en el sector de la clase media en ascenso en Buenos Aires, ganando relevancia así también la postura a favor del sufragio universal, que cada vez se hacía más popular. Devoto narra que ya a principios del siglo XX se había instalado la idea de que el sistema político argentino estaba atrasado y, por lo tanto, había un constante reclamo de que este esté a la altura de la modernidad que caracterizaba a la sociedad de nuestro país.

A pesar de su posición claramente a favor de la designación de los gobernantes mediante las elecciones, la UCR no se presentó en estas hasta que no se pudo garantizar su total

¹ *referencia*

² ñ

transparencia, es decir, hasta la sanción de la que ahora conocemos como la ley Sáenz Peña, en 1912. Esta ley, explica Ansaldi, significó el triunfo de la fracción democrática frente a la oligárquica al interior de la burguesía, que corona su proceso de ampliación de las bases sociales de su poder político mediante la ley de sufragio universal masculino, secreto y obligatorio. Finalmente, en 1916, las primeras elecciones democráticas de la Argentina resultaron en un triunfo de la fórmula presidencial de la Unión Cívica Radical encabezada por Hipólito Yrigoyen, concluyendo así esta etapa de la historia de nuestro país.

A pesar de que la democratización del voto implicó un gran avance en términos de calidad institucional en Argentina, la sanción de la ley Sáenz Peña no significó el fin del fraude electoral en el siglo XX. En el año 1930 se inauguró una nueva etapa en la historia de nuestro país, a la cual le dio inicio el golpe de Estado que volteó al gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen. Según Zanatta, este suceso derribó el mito de la estabilidad política y del predominio de los civiles sobre los militares; mito del que la sociedad argentina se jactaba desde hacía varias décadas. Las farsas electorales volvieron a convertirse en la norma y resurgieron las ideas antiliberales en la cúpula del poder político de la nación.

Se conoce como década infame al período que inicia en 1930, cuando el golpe civil-militar encabezado por el General Uriburu toma el control de la Casa Rosada. Zanatta plantea que el pánico que sembró la difusión del socialismo y el comunismo a principios del siglo XX, sobre todo en los sindicatos, llevó a que la élite argentina y el Ejército vuelvan a construir lazos con la Iglesia Católica.

Al principio del golpe, en palabras de Persello, “el radicalismo hizo su *mea culpa* reconociendo su “excesiva personalización” y se dedicó a constituirse en un partido orgánico y disciplinado (...) Y, paralelamente recuperó las viejas estrategias desplegadas en la oposición, la revolución y la abstención”.³ Las elecciones de 1931, en las que el radicalismo triunfó con un gran margen en la provincia de Buenos Aires, llevó a que la dictadura uriburista suspendiera el cronograma electoral y, finalmente, anulara las elecciones; y se designa (fraudulentamente) como ganadora a la fórmula propuesta por la Concordancia, alianza de los sectores conservadores, liderada por Justo.

Algo muy similar sucedió en las elecciones de 1937, en las que el oficialismo volvió a recurrir al fraude electoral para no perder la legitimidad de su poder político. Según Macor, debido a que el radicalismo decidió competir electoralmente en este año, el nivel de manipulación que requeriría reproducir el poder del gobierno militar dejaría en desnudo su

³ p.13

ilegitimidad; pero a su vez la aceptación de la democracia electoral implicaba resignarse a entregar el gobierno. De todas maneras, el fraude volvió a triunfar y el gobierno pasó a las manos de la fórmula encabezada por Ortiz.

Luego de que esta fórmula asumiera en 1938, el equilibrio de la coalición gobernante empezó a tambalear. En los siguientes años se fue dando un proceso de quiebre, el cual culminó cuando el oficialismo fue desplazado por otro golpe de Estado.

Ya habiendo analizado ambos períodos, me parece interesante remarcar que parece que el hilo conductor entre ambos es el manejo fraudulento del poder político, especialmente de parte de la oligarquía. Sin embargo, haciendo un análisis más profundo de estos procesos históricos, encuentro una diferencia que me parece relevante a la hora de hablar del fraude en el sistema político argentino. En el período previo a la sanción de la ley Sáenz Peña, esta oscura manipulación de la dirigencia política del país era una característica intrínseca del sistema de ese momento, y no respondía necesariamente a sucesos históricos en particular. En cambio, luego de la aparición en el panorama político las elecciones democráticas, el fraude no desaparece pero no se sitúa como algo inherente a nuestro sistema político; sino que aparece como una reacción ante ciertos gobiernos. A partir de 1916, la oligarquía argentina empieza a usar el fraude ya no como un método para proteger la legitimidad de su poder político sino como una forma de contraataque hacia aquellos gobiernos que se atrevían a disputar su poder corporativo; dando así inicio a un período del siglo XX que se caracterizó por una gran inestabilidad democrática y por la constante aparición de los infames golpes de Estado.

2. Cuando, luego de varios años de abstinencia electoral debido a su negativa a participar en elecciones no democráticas, la Unión Cívica Radical finalmente presenta una fórmula presidencial; ésta gana e Hipólito Yrigoyen es designado como Presidente de la Argentina. Así comienza un período democrático que fue desde el año 1916 a 1930, en el cual el gobierno estuvo en manos de la UCR y que marcó un giro político en la historia de nuestro país.

La primera presidencia de Yrigoyen (1916-1922) representó un rápido crecimiento económico y se diferenció de los gobiernos anteriores, ya que estos casi solamente respondieron a los intereses económicos de la oligarquía argentina. Este no fue el caso del primer Presidente de la Unión Cívica Radical, plantean Belini y Korol, que ya en sus primeros años en el gobierno apoyó varios reclamos obreros: aumentos salariales, mejoras en las condiciones laborales y reducción de la jornada laboral; políticas que no pueden explicarse sin tener en cuenta la cada vez mayor influencia que el movimiento sindical tenía

en el panorama político en esta época. Según Del Campo, en la primera presidencia de Yrigoyen aparece una “concepción del estado como árbitro de los problemas sociales, con una actitud humanitaria y paternalista hacia los sectores menos favorecidos”⁴. Es en este momento de la historia argentina que el Estado empieza a ganar en el imaginario popular un lugar cada vez más activo y comprometido, idea que se iría instalando cada vez más en los años siguientes.

Debido a la creciente hegemonía de Estados Unidos en el plano del comercio internacional, Argentina empezó a desarrollar un triángulo comercial con este país y Gran Bretaña, principal comerciante de nuestro país en la etapa agroexportadora. De todas maneras, Yrigoyen buscó poner trabas en la creciente influencia económica de América del Norte en nuestro país, tratando de conservar de esta manera los vínculos comerciales con el país europeo.

La presidencia de Marcelo T. de Alvear (1922-1928) continuó, en cierta medida, con el plan socioeconómico que había empezado a tomar forma en el primer gobierno radical. En este período (y también en la presidencia de Yrigoyen) empezaron a aparecer cada vez más medidas económicas que buscaban regular el intercambio con otros países, es decir, las importaciones y exportaciones. También se empieza a consolidar el plan impositivo que había puesto en marcha Yrigoyen, que tenía el objetivo de aumentar la recaudación del Estado argentino. A pesar de que, según Del Campo, esta segunda presidencia radical se caracterizó por la prosperidad económica, la estabilidad política y la paz social; no se realizaron grandes avances en términos de industrialización y conformación de un mercado interno que pueda suplir a las demandas de los consumidores del país. Aunque el Estado argentino empezó a tomar un rol más activo en la economía del país en este período, ese no fue el caso en la industria nacional, que no experimentará un gran impulso hasta después de que finalice esta etapa de presidencias radicales.

La última presidencia de este período fue el segundo mandato de Hipólito Yrigoyen, que se extendió desde 1928 hasta que su gobierno fue volteado por una dictadura civil-militar dos años después, en 1930. En esta tercera experiencia presidencial de la Unión Cívica Radical empiezan a aparecer disputas al interior del partido, constituyéndose en 1923 el ala Antipersonalista.

En esta última presidencia, Yrigoyen defendió la nacionalización del petróleo, dando lugar a un enfrentamiento directo entre su plan económico y los intereses de poderosas empresas

⁴ p.16

extranjeras. Aunque finalmente el Senado no aprobó esta medida, creo que este caso es un buen ejemplo de cómo, en ciertas ocasiones, los gobiernos radicales de principios del siglo XX defendieron los intereses nacionales por encima de las exigencias del mercado mundial; y de a poco empezaron a proponer un nuevo modelo de Estado, más activo en las cuestiones sociales y más comprometido con un sistema económico y comercial atento a los intereses del país. En esta última presidencia la Unión Cívica Radical se fue desgastando cada vez más, mientras que el sector conservador argentino tomaba más fuerza. Finalmente, el gobierno de Yrigoyen fue derrocado por una dictadura civil-militar encabezada por Uriburu el 6 de septiembre de 1930, finalizando así este período de presidencias radicales.